

1.12. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-9)

—

1.12. DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp. 10-17)

ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Sumario: 1. Las competencias de la comunidad autónoma sobre medio ambiente. 2. Novedades en el Derecho ambiental de Canarias. 2.1. Protección de los Lugares de Interés Comunitario de la Directiva sobre hábitats. 2.2. Tutela de los Espacios Naturales Protegidos. 2.3. Protección de la Atmósfera. 2.4. Medidas de fomento.

1. Las competencias de la comunidad autónoma sobre medio ambiente

Parece conveniente empezar recordando el ámbito de competencias que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas en materia de medio ambiente. En este sentido, el Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, fue modificado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. En su redacción actual, otorga a la Comunidad Autónoma las siguientes competencias relacionadas con el medio ambiente: como competencias exclusivas, las relativas a: Caza (artículo 30.4); Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura (artículo 30.5); Aguas, en todas sus manifestaciones, y su captación, alumbramiento, explotación, transformación y fabricación, distribución y consumo para fines agrícolas, urbanos e industriales; aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; regulación de recursos hidráulicos de acuerdo con las peculiaridades tradicionales canarias (artículo 30.6); y Espacios naturales protegidos (artículo 30.16). Como competencias de desarrollo legislativo y ejecución, las relativas al medio ambiente, incluidos los vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (artículo 31.12).

2. Novedades en el Derecho ambiental de Canarias

Las principales materias en las que se ha desarrollado la actividad normativa de la Comunidad Autónoma han sido los espacios naturales protegidos, los residuos y la ordenación de la actividad turística sobre el territorio, a través, principalmente de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas mediante la Ley 19/2003, de 14 de abril.

Sin embargo, una de las características de la actual política ambiental de Canarias es la de restringir al máximo la producción de nuevas normas, estando sólo previstas la modificación y armonización de algunas de ellas, con la idea de simplificar al máximo la normativa ambiental vigente en esta Comunidad Autónoma.

En el período que abarca la presente crónica pueden destacarse las siguientes actuaciones.

2.1. Protección de los Lugares de Interés Comunitario de la Directiva sobre hábitats

El Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, declara las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias, así como aquellas medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios.

Esta norma viene a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales. Entre los hábitats de interés comunitario se encuentra un grupo correspondiente a la región biogeográfica Macaronésica. Con la adopción de la Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre (*DOCE* nº L 5, de 9.1.02), se aprobó la lista de los 174 lugares de importancia comunitaria canarios, que habían sido propuestos por la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta lista fue posteriormente ampliada con 3 nuevos lugares mediante la Decisión 2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero (*DOUE* nº L 31, de 5.2.08).

El artículo 4.4 de la Directiva 92/43 establece que una vez elegido un lugar de importancia comunitaria, éste deberá ser declarado zona especial de conservación en el plazo máximo de seis años. En este sentido, la Decisión de la Comisión 2008/95/CE reitera, en su Considerando nº 6, que las obligaciones derivadas del artículo 4, apartado 4, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE deberán aplicarse tan pronto como sea posible y en un plazo de seis años como máximo a partir de la adopción de la lista inicial de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica Macaronésica.

En consecuencia, el presente Decreto tiene por objeto aprobar la relación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y establecer nuevas medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, además de las que ya resultan de aplicación de acuerdo con la normativa autonómica vigente.

Al respecto, cabe señalar que las Zonas Especiales de Conservación terrestres declaradas por este Decreto coinciden en un 89% con los Espacios Naturales Protegidos previstos en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,

Para aquellos Lugares de Importancia Comunitaria que no coinciden geográficamente con Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria, el Decreto prevé dotarlos de disposiciones específicas de conservación que complementen sus actuales medidas de protección para antes del final del año 2010, siguiendo las premisas del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en consonancia con los artículos 4 y 6 (1) y (2) de la Directiva 92/43/CEE.

En relación a este mismo asunto, el *Diario oficial de la Unión Europea*, de 1 de mayo de 2010 publica el anuncio de la demanda de la Comisión contra España al no haber adoptado y aplicado las medidas apropiadas de conservación, así como un régimen de protección que evite el deterioro de los hábitats y las perturbaciones significativas de las especies, garantizando la protección legal de las zonas especiales de conservación correspondientes a los lugares mencionados en la Decisión 2002/11/CE situados en el territorio español, de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.

En definitiva, la Comisión entiende que no basta con la declaración de las Zonas de Especial Conservación, sino que, en el mismo plazo, se debían haber adoptado las medidas de protección necesarias para evitar el deterioro de los hábitats y las perturbaciones significativas de las especies. Esto es, junto a esta declaración de los límites de las correspondientes Zonas de Especial Conservación, resultaba preciso adoptar, además, los planes y las medidas administrativas precisas para garantizar la protección de dichas zonas.

2.2. Tutela de los Espacios Naturales Protegidos

Durante este período se han aprobado las normas y planes de protección relativos a los siguientes espacios naturales protegidos: Monumento Natural de Montaña Colorada, Monumento Natural de La Fortaleza, Monumento Natural de Caldera del Rey, Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Cumbre Vieja, Normas de Conservación del Monumento Natural del Risco de La Concepción, Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Lagunetas, Plan Especial del Paisaje Protegido de Los Acantilados de La Culata, Plan Director Reserva Natural Integral de Inagua, Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira, Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Cumbres y, finalmente, Normas de Conservación del Monumento Natural de la Montaña de Tindaya.

En la actualidad, de los 146 Espacios Naturales Protegidos que hay en todo el Archipiélago, 120 cuentan con planes o normas aprobadas, y los 24 restantes se encuentran en avanzado estado de tramitación. Respecto de la planificación de los espacios naturales en Canarias resulta preciso destacar que, al contrario de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas, estos planes incluyen no sólo determinaciones propiamente ambientales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, sus determinaciones llegan hasta la propia clasificación del suelo y la determinación de sus usos.

En esta materia, necesariamente hay que destacar la norma relativa al Monumento Natural de Tindaya, ya que, en la misma se contiene la legitimación para llevar a cabo el Proyecto Monumental ideado por el escultor Eduardo Chillida, que ha sido objeto de una larga controversia. Dicho proyecto consiste en horadar en la montaña un cubo de aproximadamente 50x50x50, con dos oberturas que llegan hasta la cima y que permiten la entrada de la luz del sol. El Proyecto consiste en la extracción de piedra, que es, precisamente, el elemento protegido en un monumento natural. Sin embargo, esto no aparece así en dichas normas. Efectivamente, aunque la definición de la Ley es clara ya que establece de forma taxativa que se declararán Monumentos naturales “las formaciones geológicas, los yacimiento paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un especial interés por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos”, sin embargo, las Normas de Conservación ahora aprobadas permiten la extracción de piedra destinada exclusivamente a la realización de dicho Proyecto Monumental.

Con todo, quizás el elemento más discutible sea la necesidad de llevar a cabo una obra de verdadera ingeniería civil dentro de la Montaña para dar soporte a la cavidad que constituye el Proyecto ideado por Chillida. Sin embargo, en el año 2006, con ocasión de la aprobación de las primeras normas relativas este espacio, y respecto de esta misma cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su Sentencia de 9 de febrero de 2006, vino a afirmar que “según el Proyecto Fénix y la Memoria elaborada durante la tramitación de la nueva Ley de Espacios Naturales, por su valor paisajístico diferenciado por su gran belleza estética, morfológica y cromatismo, visible desde múltiples puntos del norte de la isla, por su valor geológico dada la estructura

geomorfológica, y por su valor cultural y arqueológica ya que cerca de su cima se pueden apreciar grabados podiformes que constituyen manifestaciones del arte rupestre declaradas Bien de Interés cultural por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico del Español. También tiene plantas desaparecidas en los alrededores².

El Tribunal, concluye: “Considerando lo expuesto, no puede afirmarse que los minerales de la Montaña de Tindaya determinen la protección de este espacio natural sino que el valor de protección es primordialmente el estético y paisajístico, es decir, su aspecto externo, incluida la flora y los motivos rupestres también protegidos, de ahí la prohibición de las minas a cielo abierto en razón del impacto medioambiental que ocasionan pero no por la escasez o singularidad de ese recurso natural. Por ello, a juicio de la Sala, el aprovechamiento minero en el espacio interior, previo informe geotécnico y del Patronato Insular, en el contexto del fomento del Turismo, como exige la Orden recurrida, no altera la condición natural del paisaje ni es incompatible con la protección medioambiental de los elementos protegidos sino que es tolerable en determinadas condiciones valorando la compatibilidad de cada actuación concreta con los intereses protegidos”. Como se puede observar, el Tribunal no entiende que el elemento protegido sea la gea, sino sólo el paisaje y, en consecuencia, permite la extracción minera.

Con todo, el debate puede volver a reabrirse ya que la Directriz de Ordenación General 34.2, contenida en la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, determina que “no se permitirá la actividad extractiva en las playas, barrancos y espacios naturales protegidos, excepto por razones justificadas de índole ambiental y en los casos en que expresamente admita tal actividad el planeamiento a que se refiere el número anterior”. En el expediente constan informes en el sentido de que la realización del Proyecto Monumental no está afectada por esta norma, ya que no se trata propiamente de una extracción minera. Sin embargo, eso contradice lo que estableció la propia Administración autonómica en el año 1997, en las primeras normas de conservación que sí afirmaba que se trataba de una extracción minera.

2.3. Protección de la atmósfera

La Resolución de 31 de marzo de 2010 hace pública la aprobación del Plan de Acción en materia de contaminación acústica cuya competencia corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, esto es, concretamente el referido a la aglomeración supramunicipal de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna y a todos los grandes ejes viarios cuyo tráfico supera los seis millones de vehículos al año. Tomando como base los mapas de ruido elaborados y aprobados por la Orden de 25 de marzo de 2010, establece dos ámbitos principales de actuación: por un lado, las carreteras cuya titularidad corresponde a la Administración autonómica y, por otro, la aglomeración Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, únicos ámbitos en los que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, son de su competencia.

El Plan plantea que los estudios pilotos sobre actuaciones frente al ruido realizados para mostrar las técnicas y planteamientos posibles para abordar los planes de acción en materia de ruidos de carreteras sobre tramos de entre 1 y 2 kilómetros, se ha llegado a la conclusión de que en ninguno de los casos estudiados las soluciones propuestas consiguen resolver por completo el objetivo de dejar a la población por debajo del Objetivo de Calidad Acústica aplicable. Concretamente, se desecha la solución de las pantallas acústicas, y opta por la necesidad de llevar a cabo estudios más detallados, así como abordar un plan de acción serio, con el respaldo suficiente de las administraciones involucradas y con la necesaria estructura interna y dotación de medios económicos y humanos.

Ya como medidas concretas establece las siguientes: reducción de emisión sonora, mediante la reducción media permitida en algunas autopistas; instalación de pantallas acústicas; proyectos de pantallas acústicas en autopistas y autovías de nueva construcción, así como la construcción de circunvalaciones y otras actuaciones que reduzcan el tráfico en las áreas urbanas.

Resulta al menos curioso que siendo las carreteras uno de los principales focos de ruido de las islas, no se contengan en el mismo medidas de restricción del tráfico, antes al contrario, para reducir el ruido en las áreas urbanas, la propuesta que contiene el Plan es la de construir nuevas vías de circunvalación. No sé si con ello, se resuelve el problema en las áreas urbanas, pero se traslada al exterior de dichas ciudades.

2.4. Medidas de fomento

Uno de los ámbitos en los que se produce una importante actividad por parte de la Comunidad Autónoma es el relativo a los instrumentos de fomento, entendido éstos en el sentido más amplio.

Por un lado, la Orden de 14 de abril de 2010, convoca para el año 2010 las subvenciones para proyectos en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias. Como se sabe, dichas ayudas tienen como finalidad la de potenciar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que habitan en los municipios que albergan algún Parque Nacional. Algunos ejemplos de los proyectos que se pueden financiar a través de estas ayudas son los siguientes: inversiones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias, o aquellas actividades no consistentes en inversiones, referidas a los costes de mantenimiento o sostenimiento de las iniciativas públicas o privadas orientadas a la divulgación de los valores e importancia de los Parques Nacionales entre amplios sectores de la sociedad local, o las destinadas a la formación de la población local en tareas relacionadas con la gestión de los Parques Nacionales en cualquiera de sus facetas, con la conservación de los valores naturales y culturales que justificaron su declaración o con el uso sostenible de los recursos naturales renovables. Finalmente, se admiten también aquellas solicitudes referidas a iniciativas expresamente previstas en los planes de desarrollo sostenible de los Parques Nacionales de Canarias o en la Agenda 21 de cualquiera de los municipios que conforman sus áreas de influencia socioeconómica.

Por otro, la Orden de 24 de marzo de 2010 establece las bases que han de regir la concesión de subvenciones para la compensación a propietarios colaboradores del medio ambiente por la realización de gastos corrientes, y la concesión de subvenciones para la compensación a propietarios colaboradores del medio ambiente por la realización de gastos de capital, y se efectúa la convocatoria de subvenciones para la compensación a propietarios colaboradores del medio ambiente para el año 2010. Dicha Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prevé la existencia de incentivos para fomentar las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos y de los acuerdos de custodia del territorio, tiene dos finalidades, por un lado, compensar a propietarios colaboradores del medio ambiente por los gastos corrientes que deban efectuar derivados de su actividad protectora del medio ambiente;

la segunda, compensar a propietarios colaboradores del medio ambiente por los gastos de capital que deban efectuar para el desarrollo de su actividad protectora del medio ambiente.

En relación con la implantación de sistemas de Gestión y Auditoría ambiental (EMAS), la Orden de 24 de marzo de 2010, por la que se convocan subvenciones para el fomento del instrumento establecido en el Reglamento (CE) nº 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) para el ejercicio 2010, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las bases reguladoras de estas subvenciones están recogidas en la Orden de 12 de agosto de 2008, y las actuaciones subvencionables son las siguientes: a) La verificación ambiental y su mantenimiento anual (validación de la declaración medioambiental), actuaciones estas que se encargan de comprobar que las políticas, los programas, los sistemas de gestión, los procedimientos de auditorías y la propia declaración medioambiental cumplen con los requisitos previstos en el Reglamento EMAS; o bien, b) la implantación del sistema de gestión medioambiental en la organización según el Reglamento EMAS.

Sumari: 1. Les competències de la comunitat autònoma sobre medi ambient. 2. Novetats en el dret ambiental de Canàries. 2.1. Protecció dels Llocs d'interès comunitari de la Directiva sobre hàbitats. 2.2. Tutela dels Espais naturals protegits. 2.3. Protecció de l'atmosfera. 2.4. Mesures de foment.

1. Les competències de la comunitat autònoma sobre medi ambient

Sembla convenient començar tot recordant l'àmbit de competències que la Comunitat Autònoma de Canàries té atribuïdes en matèria de medi ambient. En aquest sentit, l'Estatut d'Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 10/1982, de 10 d'agost, va ser modificat per la Llei Orgànica 4/1996, de 30 de desembre. En la redacció actual, atorga a la Comunitat Autònoma les competències següents relacionades amb el medi ambient: com a competències exclusives, les relatives a: caça (article 30.4), pesca en aigües interiors, *marisqueo* i aqüicultura (article 30.5); aigües, en totes les seves manifestacions, i la seva captació, extracció, explotació, transformació i fabricació, distribució i consum per a finalitats agrícoles, urbanes i industrials; aprofitaments hidràulics, canals i regadius; regulació de recursos hidràulics d'acord amb les peculiaritats tradicionals canàries (article 30.6); i espais naturals protegits (article 30.16). Com a competències de desenvolupament legislatiu i execució, les relatives al medi ambient, inclosos els vessaments en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma (article 31.12).

2. Novetats en el dret ambiental de Canàries

Les principals matèries en les que s'ha desenvolupat l'activitat normativa de la comunitat autònoma han estat els espais naturals protegits, els residus i l'ordenació de l'activitat turística sobre el territori, a través, principalment de les Directrius d'Ordenació General i del Turisme de Canàries, aprovades mitjançant la Llei 19/2003, de 14 d'abril.

Tanmateix, una de les característiques de la política ambiental actual de Canàries és la de restringir al màxim la producció de noves normes, estant solament previstes la modificació i harmonització d'algunes d'elles, amb la idea de simplificar al màxim la normativa ambiental vigent en aquesta Comunitat Autònoma.

En el període que abasta la present crònica poden destacar-se les actuacions següents.

2.1. Protecció dels llocs d'interès comunitari de la Directiva sobre hàbitats

El Decret 174/2009, de 29 de desembre, declara Zones especials de conservació integrants de la Xarxa Natura 2000 a Canàries, així com aquelles mesures per al manteniment en un estat de conservació favorable d'aquests espais.

Aquesta norma dóna compliment a allò que disposa la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals. Entre els hàbitats d'interès comunitari es troba un grup corresponent a la regió biogeogràfica macaronèsica. Amb l'adopció de la Decisió 2002/11/CEE de la Comissió, de 28 de desembre (*DOCE* núm. L 5, de 9 de gener de 2002), es va aprovar la llista dels 174 llocs d'importància comunitària canaris, que havien estat proposats per la Comunitat Autònoma de Canàries. Aquesta llista va ser ampliada posteriorment amb tres nous llocs mitjançant la Decisió 2008/95/CE de la Comissió, de 25 de gener (*DOUE* núm. L 31, de 5 de febrer de 2008).

L'article 4.4 de la Directiva 92/43 estableix que, una vegada escollit un lloc d'importància comunitària, aquest haurà de ser declarat zona especial de conservació en el termini màxim de sis anys. En aquest sentit, la Decisió de la Comissió 2008/95/CE reitera en el seu Fonament núm. 6, que les obligacions derivades de l'article 4, apartat 4, i de l'article 6, apartat 1, de la Directiva 92/43/CEE han d'aplicar-se tan aviat com sigui possible i en el termini de sis anys com a màxim, a partir de l'adopció de la llista inicial de llocs d'importància comunitària de la regió biogeogràfica macaronèsica.

En conseqüència, el Decret esmentat té per objecte aprovar la relació de les Zones especials de conservació integrants de la Xarxa Natura 2000 a Canàries i establir noves mesures per al manteniment en un estat de conservació favorable d'aquests espais naturals, a més de les que ja resulten de l'aplicació d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

En relació amb això, s'ha d'assenyalar que les Zones especials de conservació terrestres declarades per aquest Decret coincideixen en un 89% amb els espais naturals protegits previstos en el Text refós de les Lleis d'Ordenació del territori de Canàries i d'Espais naturals de Canàries, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 8 de maig.

Per aquells llocs d'importància comunitària que no coincideixen geogràficament amb espais naturals protegits de la Xarxa canària, el Decret preveu dotar-los de disposicions específiques de conservació que complementin les seves mesures de protecció per abans

del final de l'any 2010, tot seguint les premisses de l'article 45 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i de la biodiversitat, en consonància amb els articles 4 i 6 (1) i (2) de la Directiva 92/43/CEE.

En relació amb aquest mateix assumpte, el *Diari oficial de la Unió Europea*, d'1 de maig de 2010, publica l'anunci de la demanda de la Comissió contra Espanya per no haver adoptat i aplicat les mesures apropiades de conservació, així com un règim de protecció que eviti el deteriorament del hàbitats i les pertorbacions significatives de les espècies, tot garantint la protecció legal de les zones especials de conservació corresponents als llocs esmentats en la Decisió 2002/11/CE situats en el territori espanyol, de conformitat amb els apartats 1 i 2 de l'article 6 de la directiva 92/43/CEE.

En definitiva, la Comissió entén que no n'hi ha prou amb la declaració de les zones de conservació especial, sinó que, en el mateix termini, s'havien d'haver adoptat les mesures de protecció necessàries per evitar el deteriorament dels hàbitats i les pertorbacions significatives de les espècies. Això és, juntament amb aquesta declaració dels límits de les zones de conservació especial corresponents, resultava precís adoptar, a més, els plans i les mesures administratives precises per garantir la protecció d'aquestes zones.

2.2. Tutela dels espais naturals protegits

Durant aquest període s'han aprovat les normes i plans de protecció relatius als espais naturals següents: Monument natural de Montaña Colorada, Monument natural de La Fortaleza, Monument natural de Caldera del Rey, Pla rector d'ús i gestió del Parc natural de Cumbre Vieja, Normes de conservació del Monument natural del Risco de La Concepción, Pla especial del Paisatge protegit de Las Lagunetas, Pla especial del Paisatge protegit de Los Acantilados de La Culata, Pla director de la Reserva natural integral d'Inagua, Pla especial del Paisatge protegit de Tafira, Pla especial del paisatge protegit de Las Cumbres i, finalment, Normes de conservació del Monument natural de la Montaña de Tindaya.

En l'actualitat dels 146 espais naturals protegits que hi ha a tot l'Arxipèlag, 120 compten amb plans o normes aprovades, i els 24 restants es troben en estat avançat de tramitació. Respecte de la planificació dels espais naturals a Canàries resulta precís destacar que, al contrari del que succeeix en altres comunitats autònomes, aquests plans

inclouen no només determinacions pròpiament ambientals, sinó que, d'acord amb el que disposa el Text Refós de les Lleis d'Ordenació del territori de Canàries i d'Espais naturals de Canàries, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2000, de 8 de maig, les seves determinacions arriben fins a la mateixa classificació del sòl i la determinació dels seus usos.

En aquesta matèria, necessàriament, cal destacar la norma relativa al Monument natural de Tindaya, ja que s'hi conté la legitimació per dur a terme el projecte monumental ideat per l'escultor Eduardo Chillida, que ha estat objecte d'una llarga controvèrsia. Aquest projecte consisteix en foradar en la muntanya un cub d'aproximadament 50x50x50, amb dues obertures que arriben fins al cim i que permeten l'entrada de la llum del sol. El projecte consisteix en l'extracció de pedra, que és precisament, l'element protegit en un monument natural. Tanmateix, això no apareix així en aquesta regulació. Efectivament, malgrat que la definició de la llei és clara, ja que estableix de forma taxativa que s'han de declarar monuments naturals “les formacions geològiques, les jaciments paleontològics i altres elements de la gea que reuneixin un interès especial per la singularitat o importància dels seus valors científics, culturals o paisatgístics”, tanmateix, les Normes de conservació ara aprovades permeten l'extracció de pedra adreçada exclusivament a la realització d'aquest projecte monumental.

Amb tot, potser l'element més discutible sigui la necessitat de dur a terme una obra de veritable enginyeria civil dintre de la muntanya per donar suport a la cavitat que constitueix el projecte ideat per Chillida. Tanmateix, l'any 2006, amb ocasió de l'aprovació de les primeres normes relatives a aquest espai, i pel que fa a aquesta mateixa qüestió, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries, en la seva Sentència de 9 de febrer de 2006, va afirmar que *“según el Proyecto Fénix y la Memoria elaborada durante la tramitación de la nueva Ley de Espacios Naturales, por su valor paisajístico diferenciado por su gran belleza estética, morfológica y cromatismo, visible desde múltiples puntos del norte de la isla, por su valor geológico dada la estructura geomorfológica, y por su valor cultural y arqueológica ya que cerca de su cima se pueden apreciar grabados podiformes que constituyen manifestaciones del arte rupestre declaradas Bien de Interés cultural por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico del Español. También tiene plantas desaparecidas en los alrededores”*.

El Tribunal conclou: *“Considerando lo expuesto, no puede afirmarse que los minerales de la Montaña de Tindaya determinen la protección de este espacio natural sino que el*

valor de protección es primordialmente el estético y paisajístico, es decir, su aspecto externo, incluida la flora y los motivos rupestres también protegidos, de ahí la prohibición de las minas a cielo abierto en razón del impacto medioambiental que ocasionan pero no por la escasez o singularidad de ese recurso natural. Por ello, a juicio de la Sala, el aprovechamiento minero en el espacio interior, previo informe geotécnico y del Patronato Insular, en el contexto del fomento del Turismo, como exige la Orden recurrida, no altera la condición natural del paisaje ni es incompatible con la protección medioambiental de los elementos protegidos sino que es tolerable en determinadas condiciones valorando la compatibilidad de cada actuación concreta con los intereses protegidos”. Com es pot observar, el Tribunal no entén que l’element protegit sigui la gea, sinó només el paisatge i, en conseqüència permet l’extracció minera.

Amb tot, el debat pot tornar a reobrir-se, ja que la Directriu d’ordenació general 34.2, continguda en la Llei 19/2003, de 14 d’abril, per la que s’aproven les directrius d’ordenació general i les directrius d’ordenació del turisme de Canàries, determina que “no es permet l’activitat extractiva en les platges, barrancs i espais naturals protegits, excepte per raons justificades d’indole ambiental i en els casos en què expressament el planejament a què es refereix el número anterior admeti aquesta activitat”. En l’expedient consten informes en el sentit de què la realització del projecte monumental no està afectada per aquesta norma, ja que no es tracta pròpiament d’una extracció minera. Tanmateix, això contradiu allò que va establir al mateixa Administració autonòmica l’any 1997, en les primeres normes de conservació que sí afirmava que es tractava d’una extracció minera.

2.3. Protecció de l’atmosfera

La Resolució de 31 de març de 2010 fa pública l’aprovació del Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de competència corresponent a la Comunitat Autònoma de Canàries, això és, concretament el referit a l’aglomeració supramunicipal de Santa Cruz de Tenerife i San Cristóbal de La Laguna i a tots els grans eixos viaris on el trànsit superar els sis milions de vehicles l’any. Prenent com a base els mapes de soroll elaborats i aprovats per l’Ordre de 25 de març de 2010, estableix dos àmbits principals d’actuació: d’una banda, les carreteres la titularitat de les quals correspon a

L'Administració autonòmica i, d'altra banda, l'aglomeració de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, únics àmbits en els que, d'acord amb el que disposa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, són de la seva competència.

El Pla planteja que els estudis pilot sobre actuacions davant del soroll realitzats per mostrar les tècniques i plantejaments possibles per abordar els plans d'acció en matèria de sorolls de carreteres sobre trams d'entre 1 i 2 quilòmetres, s'ha arribat a la conclusió de què en cap dels casos estudiats les solucions proposades aconseguix resoldre completament l'objectiu de deixar la població pe sota de l'objectiu de qualitat acústica aplicable. Concretament, es descarta la solució de les pantalles acústics i s'opta per la necessitat de dur a terme estudis més detallats, així com abordar un pla d'acció seriós, amb el suport suficient de les administracions involucrades i amb l'estructura interna necessària i dotació de mitjans econòmics i humans.

Com a mesures concretes, n'estableix les següents: reducció de l'emissió sonora, mitjançant la reducció mitjana permesa en algunes autopistes; instal·lació de pantalles acústiques, projectes de pantalles acústiques en autopistes i autovies de nova construcció, així com la construcció de circumvalacions i altres actuacions que redueixin el trànsit en les àrees urbanes.

Resulta almenys curiós que, essent les carreteres un dels principals focus de soroll de les illes, no es continguin en aquest Pla mesures de restricció del trànsit, ans al contrari, per reduir el soroll de les àrees urbanes, la proposta que conté el Pla és la de construir noves vies de circumvalació. No sé si, amb això, es resol el problema de les àrees urbanes, però es trasllada a l'exterior de les ciutats.

2.4. Mesures de foment

Un dels àmbits en els que es produeix una important activitat per part de la Comunitat Autònoma és el relatiu als instruments de foment, bo i entenent aquests en el sentit més ampli.

D'una banda, l'Ordre de 14 d'abril de 2010, convoca per a l'any 2010 les subvencions per projectes en les àrees d'influència socioeconòmica dels parcs nacional de Canàries. Com és sabut, aquestes ajudes tenen com a finalitat la de potenciar el desenvolupament socioeconòmic de les poblacions que habiten en els municipis que acullen algun parc nacional. Alguns exemples dels projectes que es poden finançar a través de aquestes

ajudes són els següents: inversions en les àrees d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals de Canàries, o aquelles activitats no consistents en inversions, referides als costos de manteniment o sosteniment de les iniciatives públiques o privades orientades a la divulgació els valors i importància dels parcs nacionals entre amplis sectors de la societat local, o les adreçades a la formació de la població local en tasques relacionades amb la gestió dels parcs nacionals en qualsevol de les seves facetes, com la conservació dels valors naturals i culturals que van justificar la seva declaració o amb l'ús sostenible dels recursos naturals renovables. Finalment, s'admeten també aquelles sol·licituds referides a iniciatives expressament previstes en els plans de desenvolupament sostenible del parcs nacionals de Canàries o en l'Agenda 21 de qualsevol dels municipis conformen les seves àrees d'influència socioeconòmica.

D'altra banda, l'Ordre de 24 de març de 2010 estableix les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la compensació a propietaris col·laboradors del medi ambient per la realització de despeses corrents, i la concessió de subvencions per a la compensació a propietaris col·laboradors del medi ambient per la realització de despeses de capital, i s'efectua la convocatòria de subvencions per a la compensació a propietaris col·laboradors del medi ambient per a l'any 2010. Aquesta Ordre, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, que preveu l'existència d'incentius per fomentar les externalitats positives en l'àmbit dels espais protegits i dels acords de custòdia del territori, té dues finalitats, d'una banda, compensar els propietaris col·laboradors del medi ambient per les despeses corrents que hagin d'efectuar derivats de la seva activitat protectora del medi ambient, la segona compensar a propietaris col·laboradors del medi ambient per les despeses de capital que hagin d'efectuar per al desenvolupament de la seva activitat protectora del medi ambient.

En relació amb la implantació de sistemes de gestió i auditoria ambiental (EMAS), l'Ordre de 24 de març de 2010, per la qual es convoquen subvencions per al foment de l'instrument establert en el Reglament (CE) núm. 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) per a l'exercici 2010, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Les bases reguladores d'aquestes subvencions estan recollides en l'Ordre de 12 d'agost de 2008, i les actuacions subvencionable són les següents: a) la verificació ambiental i el seu

manteniment anual (validació de la declaració mediambiental), actuacions que s'encarreguen de comprovar que les polítiques, els programes, els sistemes de gestió, els procediments d'auditories i la mateixa declaració mediambiental compleixen amb els requisits previstos en el Reglament EMAS; o bé, b) la implantació del sistema de gestió ambiental en l'organització segons el Reglament EMAS.